



Paco González CEO de Core Tech Capital y Quetta Data Centers

“Ningún promotor de ‘data center’ puede construir una eólica en el plazo dispuesto”

Sergio Guinaldo MADRID.

Crece la oposición al proyecto de Real Decreto presentado por el Gobierno para establecer criterios de sostenibilidad a los centros de datos. Paco González, consejero delegado de Core Tech Capital, advierte de que los requisitos planteados pueden comprometer inversiones ya en ejecución y reducir el atractivo de España frente a otros mercados europeos.

González también dirige Quetta Data Centers, empresa conjunta entre Core y Azora Capital. Esta ha comenzado recientemente las obras de un *data center* en Tres Cantos, Madrid, y ultima el desarrollo de otro en Molins de Rei, Barcelona. La plataforma prevé invertir 500 millones de euros en el desarrollo de seis centros de datos en la Península Ibérica, con una capacidad conjunta de 60 MW.

“Compartimos el objetivo de desarrollar centros de datos eficientes y abastecidos con energía renovable. La discrepancia está en los plazos y en su aplicación a proyectos que ya están en marcha”, explica González a este medio. En este sentido, sostiene que “no debería imponerse a las inversiones en marcha una situación sobrevenida que ponga en riesgo desembolsos millonarios”.

Plazos excesivamente cortos

El proyecto de RD, tramitado por la vía de urgencia y cuyo periodo de alegaciones concluye el 10 de septiembre, plantea que los centros de datos acrediten que al menos el 80% de su consumo eléctrico esté cubierto por nueva generación renovable que entren en servicio dentro de un intervalo máximo de 18 meses respecto a la puesta en funcionamiento del centro de datos. Un calendario que, según el directivo, no se corresponde con los plazos industria-



EE

Quetta ya construye un centro de datos en Madrid y ultima las obras de otro en Barcelona

les y administrativos del sector energético. “Ningún promotor puede fabricar y construir una instalación eólica en el plazo dispuesto. La tramitación de una instalación eólica puede durar hasta cinco años”, afirma.

La correlación horaria plantea otro problema. Para poder garantizarla, sería necesario combinar diferentes tecnologías de generación y almacenamiento; un modelo que “exigiría una gran cantidad de capital adicional y elevaría el precio para el cliente final”, advierte Gon-

zález. Por ello, asegura que entre las alegaciones que presenten figurará una implantación gradual de las obligaciones. “Proponemos que la correlación no se mida hora a hora, sino en periodos más amplios, por ejemplo mensualmente. Así podría compensarse la electricidad renovable producida en unas horas con la consumida en otras”.

La preocupación de Quetta se centra especialmente en los proyectos que ya disponen de permisos de acceso y conexión, pero todavía no se han conectado a la red. El régimen transitorio les concede seis meses para acreditar el cumplimiento de las nuevas condiciones, bajo el riesgo de perder dichos permisos.

“Si no pudiéramos cumplir la norma, no podríamos abrir el centro de datos. Tendríamos que suspender contratos con proveedores, provisionar pérdidas millonarias y trasladar o acelerar inversiones en otros

países, especialmente Portugal”, expone González.

El directivo considera que esta incertidumbre puede influir en las decisiones de localización de nuevos proyectos. “Los inversores pueden optar por Portugal, Italia o Francia, ya que las condiciones pueden ser más favorables”, afirma.

González comparte la necesidad de evitar que proyectos sin suficiente madurez bloqueen capacidad eléctrica, pero defiende la utilización de instrumentos menos gravosos. “Si el objetivo es eliminar la especulación, existen mecanismos más sencillos”, señala, como la comprobación de los hitos de inversión, el avance efectivo de las obras o la solvencia financiera de los promotores.

“No se puede tratar igual a quien reserva capacidad sin desarrollar una inversión que a quien ya está construyendo y ha comprometido cientos de millones de euros”, concluye.